

Memoria justificativa del proyecto de Decreto por el que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Formación para la movilidad segura y sostenible.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, establece en su artículo 39 que la Formación Profesional en el sistema educativo tiene por finalidad preparar al alumnado para la actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a las modificaciones laborales que pueden producirse a lo largo de su vida, contribuir a su desarrollo personal y al ejercicio de una ciudadanía democrática y pacífica, y permitir su progresión en el sistema educativo en el marco del aprendizaje a lo largo de la vida.

La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y la Formación Profesional en su artículo 10.2 indica que las Administraciones educativas, en el ámbito de sus competencias, podrán ampliar los contenidos de los correspondientes títulos de formación profesional.

Corresponde a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la competencia en el desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades según el artículo 37.1 del estatuto de autonomía de Castilla-La Mancha aprobado por Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto.

Una vez aprobado y publicado el Real Decreto 174/2021, de 23 de marzo, por el que se establece el título de Técnico Superior en Formación para la movilidad segura y sostenible y se fijan los aspectos básicos del currículo, procede establecer el currículo del ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Formación para la movilidad segura y sostenible, en el ámbito territorial de esta Comunidad Autónoma, teniendo en cuenta los aspectos definidos en la normativa citada anteriormente.

El proyecto de Decreto se limita a definir y concretar curricularmente una enseñanza y no tiene ningún impacto significativo en la actividad económica, tampoco impone obligaciones relevantes a los destinatarios que sería la administración educativa, profesorado y alumnado en general, ni regula aspectos parciales de una materia, por ello tal y como se establece en el artículo 133.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre se omite la consulta pública.

LA DIRECTORA GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

